



**PARTIDO
ACCIÓN
NACIONAL**

**COMISIÓN DE ORDEN
DEL CONSEJO NACIONAL**

Av. Coyoacán No. 1546, C.P. 03100, México, D.F.
Tel.: 5200-4000 Ext. 3156 y 3344, Ext. Fax: 3218

RECURSO DE RECLAMACIÓN

EXPEDIENTE: 05/2012

RECURRENTE: JOSE ANTONIO NAVARRO
CÁRDENAS

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN DE
ORDEN DEL CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL EN EL ESTADO DE
QUERÉTARO

ASUNTO: SE EMITE RESOLUCIÓN

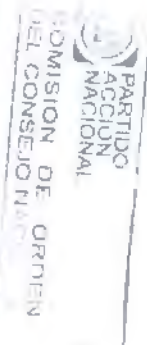
México, Distrito Federal, a treinta de agosto de dos mil doce.

VISTOS para resolver los autos del expediente citado al rubro, relativo al Recurso de Reclamación promovido por **JOSÉ ANTONIO NAVARRO CÁRDENAS**, por su propio derecho, en contra de la Resolución de fecha dos de marzo de dos mil doce, emitida por la Comisión de Orden del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Querétaro, por la que resolvió el procedimiento de sanción radicado con el número de expediente **COCEQ/236/2012**, en la que determinó imponer al recurrente la sanción consistente en la inhabilitación para ocupar cargos de elección popular por el plazo de cuatro años; y encontrándose debidamente integrada la Comisión de Orden del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional por los suscritos integrantes que firman al calce, actuando válidamente en términos de lo dispuesto por los artículos 55 de los Estatutos Generales y 10 del Reglamento del Consejo Nacional; y,

RESULTANDO

I. Antecedentes.

a) **Aprobación de solicitud de sanción.** En sesión de fecha **veintinueve de septiembre de dos mil once**, el Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Corregidora, Querétaro, aprobó solicitar a la Comisión de Orden del Consejo Estatal de la propia entidad federativa el inicio de procedimiento disciplinario en contra de **José Antonio Navarro Cárdenas**, y solicitó la imposición de las sanciones consistentes en inhabilitación por doce años y suspensión de derechos





partidistas por tres años; dicha solicitud fue presentada ante la Comisión responsable el día **diecisiete de noviembre de dos mil once**.

b) **Procedimiento disciplinario intrapartidista.** La solicitud de sanción fue radicada por la Comisión de Orden del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Querétaro el día **cuatro de enero de dos mil doce** y, previa secuela procedimental, emitió resolución en el procedimiento sancionador COCEQ/236/2012 el día **dos de marzo de dos mil doce** en el sentido de inhabilitar a **José Antonio Navarro Cárdenas** para ocupar cargos de elección popular por el plazo de cuatro años.

II. **Presentación del Recurso de Reclamación.** Inconforme con la anterior determinación, el día primero de junio de dos mil doce **José Antonio Navarro Cárdenas** interpuso Recurso de Reclamación ante la Comisión de Orden del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, medio de impugnación al que se le asignó el número **05/2012**.

III. **Solicitud del expediente formado con motivo del acto impugnado y del informe pormenorizado del asunto en cuestión.** Mediante acuerdos de fechas cuatro de junio y dieciséis de julio de dos mil doce se ordenó solicitar a la autoridad señalada como responsable el envío del expediente original formado con motivo del acto impugnado así como un informe pormenorizado del asunto de referencia.

IV. **Recepción del expediente formado con motivo del acto impugnado y del informe pormenorizado solicitado.** Por oficio sin número recibido en la Comisión de Orden del Consejo Nacional el día nueve de agosto de dos mil doce, la Secretaria Técnica de la Comisión de Orden del Consejo Estatal en Querétaro, rindió el informe pormenorizado solicitado y remitió el expediente formado con motivo del acto impugnado identificado con la clave COCEQ/236/2012.

V. **Radicación.** El día trece de agosto de dos mil doce se ordenó la radicación del Recurso de Reclamación en análisis y se ordenó dar vista del mismo a las partes a efecto de que, en vía de alegatos, manifestaran lo que a su derecho conviniera, sin que hasta la fecha alguna de éstas haya hecho valer consideración alguna, por lo que se procede a resolver el presente medio de impugnación.



PRIMERO. Competencia. Esta Comisión de Orden del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional es competente para conocer y resolver el presente Recurso de Reclamación de conformidad con lo dispuesto por los artículos 14, sexto párrafo, 16, 55 y 56 de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, 12, fracción II, 56, fracción II, 57, 58, 59, y demás relativos y aplicables del Reglamento sobre Aplicación de Sanciones, al haberse interpuesto en contra de una resolución dictada por una Comisión de Orden de Consejo Estatal, en el caso específico, la del Estado de Querétaro.

SEGUNDO. Es un hecho notorio para los suscritos integrantes de la Comisión de Orden del Consejo Nacional, y que también hace valer el miembro activo recurrente, que la resolución impugnada que corre agregada en los autos del recurso de reclamación al rubro citado, únicamente fue suscrita por dos consejeros integrantes de la Comisión de Orden del Consejo Estatal de Querétaro, en la especie, el C. Sigifredo Soltero Alvírez, en su carácter de Presidente, además del Lic. Marco Antonio Guerrero Vera, quien funge como Secretario, aunado a la Lic. María de Lourdes Cruz Córdova, en su carácter de Secretaria Técnica, sin embargo ésta no es integrante de la misma, únicamente actúa conforme a las atribuciones que le otorga el artículo 62 del Reglamento sobre Aplicación de Sanciones; asimismo se aprecia que en el espacio destinado a la rúbrica del Arquitecto Gerardo Pérez Retana, integrante de la Comisión, se asienta una rúbrica ilegible antecedido por una inscripción "P.A" (por ausencia) y seguido por la inscripción "Iñiguez".

Al respecto, el órgano responsable al rendir su informe pormenorizado hace valer por conducto de su Secretaria Técnica lo siguiente:

"Respecto de la Firma autógrafa de uno de los integrantes de la Comisión de Orden del Consejo Estatal en Querétaro específicamente del Arq. Gerardo Pérez Retana, se informa que la firma autógrafa que aparece en la Resolución efectivamente no corresponda (sic) a la firma del Arq. Gerardo Pérez Retana, específicamente se aplicó la normatividad del artículo 14 del Reglamento sobre Aplicación de Sanciones que establece "La excusa de los miembros de la Comisión de Orden, de conocer asuntos cuando consideren que exista interés personal o **circunstancias que no les permiten emitir su voto**, expresándose por medio de la máxima voluntad como lo es la firma, para resolver con objetividad e imparcialidad; así las cosas queda demostrada por medio de esta normatividad, que " en lugar del Arq. Gerardo Pérez Retana resuelve **el C. Juan Luis Iñiguez Hernández**, debido a que
Por una patria ordenada y generosa"



en esa fecha diversas circunstancias no le permitió acudir al titular Arq. Gerardo Pérez Retana".

Ahora bien, nuestra normatividad partidista establece que las Comisiones de Orden de los Consejos Estatales se integran por cinco miembros, tres de los cuales serán propietarios y dos suplentes, y en este punto destaca que las reuniones de las Comisiones de Orden de los Consejos Estatales para actuar válidamente requieren de la presencia de tres de sus miembros y que los propietarios serán sustituidos por los suplentes en sus ausencias.

Tales argumentos encuentran sustento legal en los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, específicamente los numerales 77 y 80, que a continuación se transcriben para ilustrar el tema.

"ARTÍCULO 77. Son funciones del Consejo Estatal:

...

IV. Designar a cinco de sus miembros, tres como propietarios y dos como suplentes, que no formen parte del Comité Directivo Estatal ni sean Presidentes de Comités Directivos Municipales ni funcionarios del partido que reciban remuneración por su encargo, para que integren la Comisión de Orden del Consejo Estatal;

...

"ARTÍCULO 80. Las Comisiones de Orden de los Consejos Estatales se integrarán por cinco Consejeros Estatales, tres propietarios y dos suplentes, que no sean miembros del Comité Directivo Estatal, Presidentes de Comités Directivos Municipales ni funcionarios del partido que reciban remuneración por su encargo.

Una vez constituida la Comisión, los miembros propietarios nombrarán a quienes fungirán como Presidente y Secretario de la misma, informando de ello al Comité Directivo Estatal respectivo.

Las reuniones de las Comisiones de Orden de los Consejos Estatales requerirán la presencia de tres de sus miembros.
Los miembros propietarios serán sustituidos por los suplentes en sus ausencias."

En tales términos, se estima que la Comisión de Orden responsable no se encontraba debidamente integrada para actuar válidamente; pues en el caso de que no pudiese integrarse adecuadamente con los miembros propietarios nuestros ordenamientos internos prevén la figura de la suplencia, como ha quedado asentado en los numerales transcritos, a quienes debe llamarse para actuar de forma válida en la conformación del quórum legal del órgano colegiado.



Es un hecho notorio para este órgano del Consejo Nacional que quien suscribió "P.A" el voto del consejero estatal Gerardo Pérez Retana, concretamente Juan Luis Iñiguez Hernández, se desempeña como Secretario General Adjunto del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Querétaro, cargo que es incompatible con el de integrante de la Comisión de Orden del Consejo Estatal.

Al estar plenamente acreditado que en el caso concreto no se convocó a los consejeros suplentes para conformar válidamente al hoy órgano responsable, ello constituye un vicio de existencia de la resolución impugnada, dado que no puede nacer a la vida jurídica lo ordenado por un órgano que no actuó con el quórum estatutario para resolver válidamente. Consecuentemente la resolución está afectada de nulidad absoluta y debe revocarse lisa y llanamente la sanción consistente en la inhabilitación para ocupar cargos de elección popular por el plazo de cuatro años impuesta a José Antonio Navarro Cárdenas; consecuentemente lo procedente es dar aviso al Registro Nacional de Miembros a efecto de que proceda a dejar insubsistente dicha sanción y se restituya en sus derechos partidistas al miembro activo recurrente.

Asimismo, esta Comisión de Orden del Consejo Nacional a fin de expedir una justicia pronta y expedita, de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede a determinar si cuenta con elementos suficientes para pronunciarse sobre la legalidad de la resolución recurrida en la parte que no satisfizo el interés jurídico del demandante, concretamente **la valoración de pruebas llevada a cabo por la responsable**, y, en tal caso, pronunciarse sobre la legalidad o ilegalidad de la resolución impugnada (con independencia de que provenga del procedimiento administrativo), analizando las circunstancias y agravios que confrontados con el valor que otorgue a las pruebas de referencia, lleven al pronunciamiento del fondo del asunto; por tanto, en el caso concreto, se considera que no resulta procedente devolver los autos al órgano que conoció del procedimiento disciplinario para que emita otra resolución para subsanar el vicio de nulidad absoluta ya precisada en detrimento precisamente del principio de economía procesal y la pronta administración de justicia que establece el referido artículo 17 Constitucional, ya que dicho reenvío sería dable si este cuerpo colegiado no contara con los elementos necesarios para pronunciarse al respecto, en cuyo caso resultaría procedente decretar la nulidad de la resolución impugnada precisando los efectos de ésta, para que una vez subsanada dicha violación, la autoridad responsable emitiera la resolución que en derecho proceda.



Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 94/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo: XVI, Agosto de 2002, Página: 377, que indica lo siguiente:

**TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.
CUANDO ANTE ÉL SE CONTROVIERTA UNA RESOLUCIÓN
DICTADA EN UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN
MATERIA DE RESPONSABILIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS,
POR APLICACIÓN INCORRECTA DE LA LEY SOBRE
VALORACIÓN DE PRUEBAS, DICHO ÓRGANO DEBERÁ
DETERMINAR SI CUENTA CON ELEMENTOS SUFICIENTES
PARA PRONUNCIARSE SOBRE LA LEGALIDAD O ILEGALIDAD
DE AQUÉLLA, EN LA PARTE QUE NO SATISFIZO EL INTERÉS
JURÍDICO DEL DEMANDANTE Y, EN SU CASO, RESOLVER
SOBRE EL TEMA DE FONDO PROPUESTO, REALIZANDO LA
VALORACIÓN CORRESPONDIENTE.-** Cuando ante el Tribunal

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se controvierta la legalidad de una resolución dictada en un procedimiento administrativo por haber apreciado las pruebas atendiendo a las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles, y no conforme al Código Federal de Procedimientos Penales (de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, vigente hasta el trece de marzo del dos mil dos), el citado tribunal, en atención a lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 197 y cuarto párrafo del diverso numeral 237, ambos del Código Fiscal de la Federación, deberá determinar si cuenta con elementos suficientes para pronunciarse sobre la legalidad de la resolución recurrida en la parte que no satisfizo el interés jurídico del demandante y, en tal caso, deberá pronunciarse sobre la legalidad o ilegalidad de la resolución impugnada (con independencia de que provenga del procedimiento administrativo o del recurso de revocación respectivo), analizando las circunstancias y agravios que confrontados con el valor que otorgue a las pruebas que obren en el expediente, lleven al pronunciamiento del fondo del asunto; por tanto en tales supuestos no deberá devolver los autos a la autoridad administrativa que conoció del procedimiento administrativo para que emita otra resolución, ya que dicho reenvío será dable ante la existencia de una violación formal cometida dentro del procedimiento administrativo que impida al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa contar con los elementos necesarios para pronunciarse al respecto, en cuyo caso deberá decretar la nulidad de la resolución impugnada precisando los efectos de ésta, para que una vez subsanada dicha violación, la autoridad administrativa emita la resolución que en derecho proceda, teniendo en cuenta que el procedimiento en materia de responsabilidad de servidores públicos no puede de ninguna manera quedar sin resolverse, pues atentaría contra el interés y el orden público.

Contradicción de tesis 31/2002-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Sexto y Séptimo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 5 de julio de 2002. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Silvia Elizabeth Morales Quezada.



Tesis de jurisprudencia 94/2002. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del nueve de agosto de dos mil dos.

Amén de lo anterior, esta Comisión de Orden del Consejo Nacional advierte que la materia de la sanción a José Antonio Navarro Cárdenas radica en un adeudo de cuotas partidistas, dado que el hoy recurrente se desempeñó como Regidor en el Ayuntamiento de Corregidora, Querétaro, durante el periodo del primero de octubre de dos mil seis al treinta de septiembre de dos mil nueve, periodo durante el cual enteró al Partido Acción Nacional la cantidad de \$237,799.21 (Doscientos treinta y siete mil setecientos noventa y nueve pesos 21/100 M.N) por concepto de cuotas de Funcionario Público de Elección popular postulado por Acción Nacional, existiendo un adeudo por la cantidad de \$10,699.08 (Diez mil seiscientos noventa y nueve pesos 08/100 M.N.); ahora bien, es un hecho incontrovertido por las partes que en la defensa que hizo valer el hoy recurrente en el procedimiento sancionador en fecha **veintitrés de enero de dos mil doce**, exhibió ante la responsable los siguientes elementos de prueba a efecto de acreditar que había dejado de existir la materia del inicio del procedimiento:

1. Copia simple del recibo de cuotas de fecha **diecisiete de enero de dos mil doce** por la cantidad de **\$10,700.00 (Diez mil setecientos pesos 00/100 M.N.)** expedido por el Comité Directivo Municipal de Corregidora, con número 00031. Documental que obra en autos en copia certificada por el Notario Público número 30 del Estado de Querétaro.
2. Copia simple del escrito de fecha **diecisiete de enero de dos mil doce** a través del cual José Antonio Navarro Cárdenas solicitó al Presidente del Comité Directivo Municipal de Corregidora, Querétaro, liquidar un adeudo de cuotas por la cantidad de \$10,700.00 (Diez mil setecientos pesos 00/100 M.N.) y solicitó se le expidiera constancia de no adeudo y salvedad de derechos.

Además, como prueba superveniente presentada ante la Comisión de Orden del Consejo Estatal en Querétaro, José Antonio Navarro Cárdenas exhibió el día ocho de febrero de dos mil doce la constancia emitida por el Tesorero del Comité Directivo Municipal de Corregidora, Querétaro, por la que hizo constar que el hoy impetrante ***"se encuentra al corriente en el pago de sus cuotas como funcionario público de elección, al día de hoy en este Comité Directivo Municipal"***.

En este tenor, si el recurrente acreditó el cumplimiento del pago respectivo, e inclusive que el órgano directivo municipal con fecha siete de febrero de dos mil doce certificó



el cumplimiento del pago de cuotas, es inconcuso que el acto de indisciplina imputado había dejado de existir, previo a la fecha de resolución, dos de marzo de dos mil doce, no es óbice a lo anterior que el procedimiento sancionador previsto en nuestro Reglamento sobre Aplicación de Sanciones ya hubiera iniciado como lo argumenta la Comisión responsable porque, indistintamente de la etapa procedimental en la que se encontraba el asunto, ésta se encontraba en aptitud legal de abstenerse de imponer sanción alguna al miembro activo tomando en consideración que la conducta tenida como irregular en contra del militante fue corregida o subsanada de manera espontánea por éste así como que los efectos habían sido resarcidos por lo que ya no habría materia que diera sustento a la aplicación de una sanción por la conducta que originó el procedimiento, por actualizarse en la especie el principio jurídico de la **aplicación retroactiva en beneficio del presunto responsable.**

A mayor abundamiento, se precisa que no existe elemento rígido en nuestra normatividad partidista, que establezca un término fatal para realizar esta aportación pecuniaria, lo anterior se desprende al analizar el contenido de las normas aplicables, mismas que a continuación se citan:

Estatutos Generales del PAN

"Artículo 10. Los miembros activos tienen los siguientes derechos y obligaciones, en los términos de estos Estatutos y los reglamentos correspondientes.

...

II. Obligaciones

...

f. Aportar, cuando sean designados servidores públicos en los gobiernos emanados del Partido, una cuota en los términos que establezca el reglamento correspondiente.

Artículo 14, párrafo quinto.

"Para el caso de incumplimiento del pago de cuotas de funcionarios y servidores públicos del Partido, serán procedentes las sanciones previstas en el artículo 13 de estos estatutos; en el caso de la inhabilitación, ésta se podrá solicitar en un término de cuatro años contados a partir de la fecha de conclusión del cargo."

Reglamento sobre Aplicación de Sanciones:

"Artículo 16. A.- Se considera infracción de los miembros activos del Partido:

...

VI. No contribuir a los gastos del Partido mediante el pago de cuotas.

..."

Por una patria ordenada y generosa



Reglamento de Miembros de Acción Nacional

"Artículo 29. Los miembros activos que sean designados servidores públicos en los gobiernos emanados del Partido, que por su encargo devenguen una percepción mensual bruta igual o superior a 10 salarios mínimos vigentes en el lugar en que desempeñan el cargo, contribuirán al sostenimiento del comité municipal en el que tengan establecido su domicilio, con el 2% de su percepción después de descontar los impuestos correspondientes; incluidas todas las remuneraciones que reciban por el ejercicio de su cargo cualquiera que sea la denominación que les dé la entidad pagadora.

..."

De lo trasunto no se advierte que el legislador panista haya precisado un término fatal para el pago de las cuotas de aquellos integrantes del Partido que hayan sido distinguidos con el alto encargo de ser designados servidores públicos en gobiernos emanados de nuestra institución.

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sido muy clara en el sentido de pronunciarse por evitar interpretaciones restrictivas y ensanchar y potencializar los derechos de los militantes.

Este órgano resolutor estima que ante la Comisión de Orden del Consejo Estatal de Querétaro, José Antonio Navarro Cárdenas acreditó que había **liquidado su adeudo y que inclusive el órgano directivo municipal correspondiente le extendió una documental en la que se certificaba tal circunstancia, es decir, que se encuentra al corriente del pago de sus cuotas**, de lo anterior se tiene que, si el recurrente había acreditado el pago de los adeudos que tenía, la autoridad responsable válidamente, por actualizarse el principio jurídico de la aplicación retroactiva en beneficio del presunto responsable, de todas aquellas normas que le benefician, se encontraba en la aptitud legal de abstenerse de imponer sanción alguna.

Además, en autos no obra una sola constancia en la que indiciariamente se desprenda la negativa a enterar el adeudo respectivo al Partido, es decir, no obra documental alguna que indique que existió un requerimiento para efectuar el pago y que existiera una negativa del miembro activo para su cumplimiento, además se advierte que en el procedimiento sancionador el propio recurrente acreditó que fue enterando con cierta periodicidad durante su encargo como regidor de Corregidora, Querétaro, las cuotas partidistas que se encontraba obligado a cubrir, caso contrario, pudiera resultar procedente alguna medida disciplinaria ante la omisión a los requerimientos, sin embargo, dado el cumplimiento espontáneo de la obligación

Por una patria ordenada y generosa



específica acreditado por el miembro activo recurrente, tal consideración orilla a no sancionar al militante.

Lo anterior es así pues esta Comisión de Orden del Consejo Nacional estima que debe aplicarse en la parte conducente la jurisprudencia **S3ELJ 62/2002** emanada de nuestro máximo órgano electoral en materia jurisdiccional cuyo rubro es el siguiente **"PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. DEBE REALIZARSE CONFORME A LOS CRITERIOS DE IDONEIDAD, NECESIDAD Y PROPORCIONALIDAD."**, del que se advierte que el principio de necesidad o de intervención mínima se refiere a que deben elegirse las medidas que afecten en menor grado los derechos fundamentales de las personas relacionadas con los hechos denunciados en tratándose del ejercicio de facultades discrecionales.

En mérito de lo expuesto y fundado, se

RESUELVE:

ÚNICO. Se **revoca** la resolución impugnada, se ordena restituir a José Antonio Navarro Cárdenas en su membresía activa y en el goce de sus derechos partidistas además de la práctica de las diligencias necesarias a efecto de cumplir la presente determinación. Dese vista al Registro Nacional de Miembros para que actúe conforme a la presente determinación.



NOTIFÍQUESE: por correo certificado a la parte recurrente en el domicilio ubicado en: Calle Plan de San Luis, número 3, Colonia Casablanca, en la Ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro; por correo certificado a la autoridad señalada como responsable y al Comité Directivo Municipal de Corregidora, Querétaro, acompañando copia certificada de la presente resolución, la cual deberá ser cotejada por el Secretario Técnico de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Reglamento sobre Aplicación de Sanciones. Recábense las constancias atinentes y agréguese a autos.

En su oportunidad archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

Por una patria ordenada y generosa



Así, lo resolvieron por unanimidad de votos los integrantes de la Comisión de Orden del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional firmando al calce para constancia legal.


Ing. José Guadalupe Tarcisio Rodríguez Martínez
Lic. Luis Mejía Guzmán
Agrónomo Abelardo Escobar Prieto
Vicente de Jesús Esqueda Méndez
Dip. Norma Leticia Salazar Vázquez
Sen. Sergio Álvarez Mata